

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, veintiséis (26) de enero de dos mil quince (2015)

REF: Radicado : 05-001-33-33-007-2015-00011-00
Actuación : ACCIÓN DE TUTELA
Accionante : DAISSY YARLEY CALLE DUQUE
Accionado : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS.

Tema : Si no hay respuesta de manera pronta y oportuna de que tratan las normas especiales y constitucionales a una solicitud, entonces se puede afirmar que existe vulneración al derecho de Petición.

Sentencia : 43

La señora **DAISSY YARLEY CALLE DUQUE**, actuando en nombre propio, acude en ejercicio de la Acción de Tutela con el fin de solicitar a este Despacho la protección de sus Derechos Constitucionales Fundamentales, que considera amenazados por la omisión en la que incurre la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**, al no indicarle darle respuesta a la solicitud por ella presentada el día 17 de octubre de 2014.

Para la prosperidad de sus pretensiones, se apoya en los fundamentos fácticos que este Despacho a renglón seguido resume:

Señala que presentó petición el día 17 de octubre de 2014 a través de la cual solicitó la reparación administrativa por desplazamiento y la inclusión en proyectos productivos, sin que a la fecha haya recibido respuesta a la misma.

Con su solicitud de amparo allega copia de comunicación emitida por la entidad el 21 de diciembre de 2014, a través de la cual le informa que de acuerdo con su solicitud fue incluida en el RUV.

TRÁMITE DEL PROCESO

Mediante auto del **15 de enero de 2015**, se admitió la tutela y se ordenó la notificación a la entidad accionada (**folio 15**), para lo cual se libró el oficio 121 de la misma fecha (**folio 16**) y recibido por la entidad accionada el día 19 de enero siguiente (**folio 17**).

POSICIÓN DE LA ACCIONADA

La **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**, no emitió respuesta al requerimiento dentro del término concedido, por lo que se dará aplicación al Artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.

RECUESTO PROBATORIO

Reposa en el expediente el siguiente elemento probatorio:

- Copia de petición radicada ante la Unidad el día 17 de octubre de 2014 con todos sus anexos (**folios 4 a 12**).

- Copia de comunicación emitida por la entidad el 21 de diciembre de 2014 (**folio 13**).

Vencido como se encuentra el término concedido para dar contestación a la acción de tutela de la referencia y al no observar en la misma, causales de anulación de lo actuado, se procede a dictar el fallo de instancia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es competente este Despacho para conocer de la presente acción, en desarrollo de las facultades conferidas en el artículo 86 de la Constitución Política, y de conformidad con los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1° del Decreto 1382 de 2000 y se está emitiendo fallo dentro del término perentorio y preferencial de diez (10) días, previsto en el inciso 4° de la citada disposición constitucional y en el artículo 15 del Decreto en mención.

En este caso la acción de tutela la dirigió la señora **DAISSY YARLEY CALLE DUQUE** en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS** y solicita del juez de tutela la protección de sus Derechos Constitucionales Fundamentales, que considera amenazados por la accionada.

Legitimación en la Causa:

El Decreto 2591 de 1991, que reglamenta el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia en su artículo 10, dispone que toda persona puede actuar por si misma o a través de representante, por lo que la aquí accionante, señora **DAISSY YARLEY CALLE DUQUE** está legitimada para ejercer la presente acción en causa propia.

En cuanto a la legitimación por pasiva encuentra el Despacho que la **entidad accionada** está legitimada, toda vez que el accionante se encuentra en estado de indefensión frente a ésta, habida cuenta que no existe otro mecanismo de defensa frente a la vulneración del Derecho Constitucional Fundamental invocado, por lo que el caso se enmarca dentro de lo previsto en el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991.

Problema Jurídico:

En el presente caso, se deberá establecer si se ha vulnerado algún derecho constitucional a la actora, y en caso positivo si la entidad accionada, es responsable de dicha vulneración.

Antecedentes Jurisprudenciales.

1. Tenemos que el Derecho de Petición es reconocido en el artículo 23 de la Carta Política es un derecho fundamental de carácter subjetivo, que asegura a las personas la posibilidad de acudir ante las autoridades públicas o personas privadas, en demanda de una pronta resolución a sus peticiones. A este respecto la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente:

*"1. Tal y como lo expresa el artículo 23 de la Constitución, el derecho de petición debe entenderse como la facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes, - o de pedir copias de documentos no sujetos a reserva -, a las autoridades correspondientes, y obtener de ellas una pronta y completa respuesta sobre los requerimientos formulados.¹ Así, se ha entendido de manera general, que es un derecho que involucra dos momentos diferentes:
"El de la recepción y trámite de la solicitud, el cual implica el debido acceso de la persona a la administración para que ésta considere el asunto que se le plantea, y el*

¹ Corte Constitucional. Sentencia T-180 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

*de la respuesta, cuyo sentido trasciende el campo de la simple adopción de decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante.*²

*En virtud de lo anteriormente expuesto, la Corte Constitucional ha reconocido en múltiples oportunidades³, que **el derecho de petición supone una obligación de "hacer" de las autoridades, obligación que no puede verse minimizada por factores como el silencio administrativo en razón a que este último no define ni material ni sustancialmente la solicitud de quien interpone la petición, desvirtuándose con ello la filosofía del mandato constitucional.***⁴

2. En este sentido, debe entenderse que la obligación de dar una respuesta, no supone el deber de resolver en un determinado sentido la petición, es decir, a favor o en contra de la solicitud del peticionario, sino tan solo la exigencia de contestar la solicitud presentada por el ciudadano de manera completa y oportuna.

De ello se deriva en consecuencia, que la ausencia de una respuesta definitiva, dentro del término correspondiente, puede configurar claramente una violación del derecho de petición protegido por la Constitución." (Negrilla fuera de texto).

La Corte Constitucional en Sentencia T-350 de 2006 manifestó⁵ qué hace parte del núcleo esencial del derecho de petición:

"(i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la facultad de obtener una respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos previstos en el ordenamiento jurídico; (iii) el derecho a recibir una respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad analice la materia propia de la solicitud y se pronuncie sobre la totalidad de los asuntos planteados, es decir, la correspondencia entre la petición y la respuesta, excluyendo fórmulas evasivas o elusivas y; (iv) la pronta comunicación al peticionario sobre la determinación adoptada, con independencia de que su contenido sea favorable o desfavorable. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho fundamental de petición".

En conclusión, el derecho fundamental de petición garantiza que cualquier persona pueda elevar ante la administración pública o un particular con funciones públicas una solicitud, que deberá resolverse de fondo en un término específico y de manera congruente con lo que se solicita, sin importar si la información resulta o no favorable a lo pedido.

2. Protección de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.⁶

Ha dicho la Honorable Corte Constitucional frente al tema que:

"Ahora bien, como ya fue mencionado, el señora Rosmira Serrano Quintero no sólo es titular de los derechos fundamentales que el ordenamiento le reconoce en calidad de atención urgente y restablecimiento socioeconómico a quien se encuentra en situación de desplazamiento forzado. Adicionalmente, según su

² Corte Constitucional. Sentencia T-372 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

³ Ver, entre otras, las Sentencias T-424 de 1995; T-524 de 1997; T-369 de 1997 y C-005 de 1998.

⁴ Corte Constitucional. Sentencia T-180 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

⁵ Ver entre muchas otras las Sentencias T-147 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Vargas), T-012 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Vargas), T-1204 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-364 de 2004 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), T-1075 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-114 de 2003 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-1105 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Vargas), T-842 de 2002 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-220 de 2001 (MP. Fabio Morón Díaz), T-970 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero), T-206 de 1998 (MP. Fabio Morón Díaz), T-069 de 2007 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-169 de 1996 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa), T-103 de 1995 (MP. Alejandro Martínez Caballero) y T-219 de 1994 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).

⁶ Confrontar Sentencia T-821-07

relato, ha sido víctima de graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones del derecho internacional humanitario, (como la desaparición de su cónyuge, el homicidio de su padre y el desplazamiento forzado de su familia a causa de la actuación de grupos armados al margen de la ley). En consecuencia, es titular de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

La Corte ya ha tenido oportunidad de señalar que los derechos fundamentales a la verdad y a la justicia de las víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, dan lugar a una serie de obligaciones inderogables a cargo del Estado. En términos muy generales, estas obligaciones aparejan el deber del Estado de adelantar investigaciones serias, oportunas, independientes y exhaustivas sobre los hechos criminales que se han puesto de manifiesto y la de informar a la persona afectada, sobre el resultado de las investigaciones.

Finalmente, el derecho a la reparación integral supone el derecho a la restitución de los bienes de los cuales la persona ha sido despojada; la indemnización de los perjuicios; y la rehabilitación del daño, así como medidas destinadas a la reivindicación de la memoria y de la dignidad de las víctimas. Adicionalmente, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas de no repetición para garantizar que las organizaciones que perpetraron los crímenes investigados sean desmontadas y las estructuras que permitieron su comisión removidas, a fin de asegurar que tales crímenes no volverán a tener lugar.

(...)

El derecho a la reparación integral por el daño causado

Adicionalmente, las personas que han sido objeto de violaciones de derechos humanos tienen derecho a la reparación integral del daño causado. Este derecho comprende tanto las medidas destinadas a la satisfacción de la verdad y de la memoria, como aquellas orientadas a la restitución, indemnización; rehabilitación del daño, así como garantías de no repetición de los crímenes de los cuales fueron víctima”.

Caso Concreto:

En este caso la Acción de Tutela la dirigió en nombre propio la señora **DAISSY YARLEY CALLE DUQUE**, solicitando al Juez de Tutela la protección de sus Derechos Constitucionales Fundamentales y que se ordene a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**, que le brinde una respuesta de fondo a la solicitud por ella presentada el 17 de octubre de 2014.

La accionada, no emitió respuesta al requerimiento dentro del término concedido, por lo que se dará aplicación al Artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.

Dentro de este contexto constitucional, legal y jurisprudencial se entra a examinar la situación fáctica planteada en la demanda de tutela y se encuentra que la señora **DAISSY YARLEY CALLE DUQUE**, presentó petición ante la Unidad el día 17 de octubre de 2014 (folios 4 y 5), a través de la cual solicita que se le haga entrega de la reparación administrativa por el desplazamiento padecido y si bien en los hechos de la acción afirma haber solicitado la inclusión en proyectos productivos, del escrito de petición se evidencia que solo solicitó reparación, sin que según la tutelante, a la fecha la entidad haya emitido respuesta alguna, afirmación que no fue desvirtuada por la entidad al no dar contestación a la acción.

Ahora, con la solicitud de amparo, la actora allega copia de comunicación emitida por la entidad el 21 de diciembre de 2014, a través de la cual le informa que de acuerdo con su solicitud fue incluida en el RUV (folio 13), sin que indique por qué hecho victimizante fue incluida y en el evento de haber sido por el desplazamiento padecido, no refiere cuál es el trámite a seguir para acceder a la respectiva reparación administrativa.

Ahora, El derecho de petición fue regulado en los artículos 14 a 33 de la Ley 1437 de 2011; no obstante, la H. Corte Constitucional a través de providencia C- 818 del 1º de noviembre de 2011, los declaró inexecutable, pero dicha inexecutableidad quedó diferida por disposición del mismo Tribunal Constitucional hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso expidiera la Ley Estatutaria correspondiente para regularlo, es decir, al momento de presentación de la petición objeto del presente amparo, esto es 9 de enero de 2015, se entiende que dicha regulación normativa del derecho de petición es inexecutable, por lo que se puede afirmar que no hay regulación de este derecho.

Es así como, si nos remitimos a la sentencia C 818 de 2011, en su parte motiva, se evidencia que lo que finalmente pretendió la Corte Constitucional con dicho fallo fue no generar graves riesgos al goce efectivo del derecho fundamental de petición de los ciudadanos al declarar inexecutable los artículos del CPACA que derogaron el anterior CCA, en lo referente a dicho derecho, al considerar que *“no existirá certeza por parte de los funcionarios públicos del trámite que debe imprimirse a las solicitudes presentadas por los ciudadanos”*.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional consideró que *“la declaratoria de inexecutableidad diferida garantiza que el Congreso discuta y aprueba una ley estatutaria del derecho de petición, en la que se actualicen los elementos estructurales de esta garantía constitucional, con base en las exigencias de la nueva Carta Política y de la jurisprudencia constitucional, respondiendo al espíritu del nuevo Código Contencioso”* y aunado a ello el *grave riesgo al goce efectivo* al derecho de petición que trató de evitar dicha Corporación, como quiera que a la fecha ya ha expedido el Congreso de la Republica la regulación pertinente pero aún no ha sido sancionada, pese ha haberse cumplido el termino otorgado (31 de diciembre de 2014), el Despacho seguirá dando trámite a las acciones de tutela con base en los artículos que regulan el derecho de petición de la Ley 1437 de 2011, en aras de garantizar el efectivo acceso a la administración de justicia por parte de los ciudadanos y la protección efectiva de sus derechos.

En este orden de ideas, se evidencia que la entidad no ha dado respuesta de fondo a la solicitud de la actora presentada en el día 17 de octubre de 2014, aun después de haber transcurrido **los 15 días hábiles** contemplados en el artículo 14 del CPACA, con los que contaba para dar contestación a la petición relacionada con reparación administrativa por desplazamiento, al no informarle claramente si ya fue incluida en el RUV por ese hecho padecido y los trámites correspondientes para acceder a la indemnización o la razón por la cual no es procedente acceder a su solicitud.

Por lo anterior, se encuentra violado el derecho de petición de la señora **DAISSY YARLEY CALLE DUQUE**, al no obtener una respuesta de fondo y completa de acuerdo a lo peticionado, por lo cual, de acuerdo a la jurisprudencia y la Ley, habrá que tutelarse el mismo.

De acuerdo a lo expuesto, y teniendo como derrotero el precedente Constitucional establecido por la Corte y a la viabilidad de la acción de tutela como mecanismo idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, se **ORDENARÁ** al Representante Legal de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS**, o a quien éste designe, que en el término de **QUINCE (15) DÍAS HÁBILES** contados a partir de la notificación de la presente providencia, se sirva emitir respuesta- *si aún no lo ha hecho*- y comunicar en todo caso a la actora, la decisión que amerita la solicitud por ella presentada el 17 de octubre de 2014 relacionada con reparación administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento, en la cual se le indique, **en el evento que ya haya sido incluida en el RUV por ese hecho,** el trámite a seguir para acceder a la respectiva reparación administrativa; ahora, **en el evento que la entidad no haya resuelto lo peticionado,** deberá emitir la decisión correspondiente, la cual deberá ser debidamente notificada a la accionante en el mismo término.

Por último, se advierte a la parte actora que para efectos de impartir el **TRÁMITE DE CUMPLIMIENTO previsto por el artículo 27 del decreto 2591 de 1991, deberá poner en conocimiento del Despacho, la omisión por parte de la entidad en atender las órdenes impartidas en la sentencia de tutela, en el evento que no haya procedido de conformidad y en los términos previstos en esta decisión**".

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

FALLA

1º. TUTELAR el derecho fundamental de petición invocado, que la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS** vulnera a la señora **DAISSY YARLEY CALLE DUQUE** identificada con cédula de 43.191.268 de acuerdo a lo manifestado en la presente Sentencia.

2º. ORDENAR al Representante Legal de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS** o a quien éste designe, que en el término de **QUINCE (15) DÍAS** contados a partir de la notificación de la presente providencia, se sirva emitir respuesta- *si aún no lo ha hecho*- y comunicar en todo caso a la actora, la decisión que amerita la solicitud por ella presentada el 17 de octubre de 2014 relacionada con reparación administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento, en la cual se le indique, en el evento que ya haya sido incluida en el RUV por ese hecho, el trámite a seguir para acceder a la respectiva reparación administrativa; ahora, en el evento que la entidad no haya resuelto lo peticionado, deberá emitir la decisión correspondiente, la cual deberá ser debidamente notificada a la accionante en el mismo término.

3º. El incumplimiento de las órdenes establecidas en la presente providencia acarrea las sanciones consagradas en el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, por lo cual deberá informarse a este Despacho el cumplimiento de lo ordenado. (Artículo 27, Decreto 2591 de 1991).

4º. De no ser impugnado este fallo dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remítase, al día siguiente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

5º. Por Secretaría, a través de telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento **NOTIFICAR** el presente Fallo, tal como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Se advertirá a las partes, que contarán con el término de tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia para efectos de la impugnación, que concede el artículo 31 ibídem.

6º. Para efectos de impartir el TRÁMITE DE CUMPLIMIENTO previsto por el artículo 27 del decreto 2591 de 1991, la PARTE ACTORA deberá poner en conocimiento del Despacho, la omisión por parte de la entidad en atender las órdenes impartidas en la sentencia de tutela, en el evento que no haya procedido de conformidad y en los términos previstos en esta decisión".

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRÍZ STELLA GAVIRIA CARDONA
Juez.

a.h